

Diputada Gloria Naveillan: “El Estado se endeuda con dinero de los ciudadanos mientras se pagan miles de licencias fraudulentas”

Con indignación reaccionó la diputada por La Araucanía, Gloria Naveillan, tras analizar el informe recientemente emitido por la Contraloría General de la República, el cual reveló que más de 788 servicios públicos han reportado altos índices de licencias médicas, generando un grave deterioro en la calidad de los servicios y un enorme daño al presupuesto del Estado.

“Estamos hablando de instituciones que cumplen un rol fundamental para los ciudadanos y personas vulnerables”, señaló Naveillan, aludiendo por ejemplo: a Junji y Fundación Integra, que lideran la lista con 2.280 y 1.934 licencias respectivamente. “¿Qué pasa cuando no hay quién cuide a nuestros niños? Se afecta directamente a miles de familias trabajadoras”, advirtió.

Para empeorar la situación la Contraloría detectó que varios funcionarios con licencia viajaron fuera de Chile. “Esto es impresentable”, afirmó Naveillan, pues demuestra la falta de probidad de estos funcionarios públicos que han usado licencias ideológicamente falsas para salir de vacaciones incluso fuera del país.

La situación en La Araucanía es particularmente alarmante. Municipios como Lonquimay (140), Victoria (73), Melipeuco (73), Angol (69), Curacautín (47), Lautaro (44), Collipulli (37), Villún (33), Ercilla (25), Lumaco (20), Galvarino (19), Los

Sauces (15), Traiguén (15), Renaico (13), Purén (12) y Perquenco (12), presentan altos niveles de licencias médicas, al igual También figuran el Hospital de Angol (3) y el Hospital de Traiguén (1)

En el área de agricultura la situación también es preocupante: la cantidad de licencias en servicios agrícolas y forestales estratégicos, claves para la economía local, generan un daño a los usuarios que no tiene reparación posible. Sólo el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) registra 193 licencias; CONAF, 153; INDAP, 36; y la Subsecretaría de Agricultura, 6, a nivel Nacional. Estas instituciones son esenciales para la fiscalización, apoyo técnico, créditos y asistencia a productores rurales. Todos los servicios que dependen del Ministerio de Agricultura han visto una importante rebaja en su presupuesto, “Cuando el SAG o INDAP bajan su dotación, muchas veces no se fiscalizan predios ni se atienden emergencias agrícolas. Es el agricultor pequeño quien paga el cos-



to”, sostuvo la diputada.

Los reemplazos de personas con licencias médicas son costosos o derechamente inexistentes. Esto significa que muchas veces los servicios dejan de prestar la ayuda para la cual están creados. Peor aún, La diputada explicó que las licencias obligan a los organismos a

gastar más en reemplazos, (si es que cuentan con presupuesto para reemplazos, lo cual muchas veces no es así), alguien debe cumplir la función pública para la cual está contratada la persona con licencia. “¿De dónde creen que sale la plata? Del bolsillo de todos los ciudadanos. Y como no alcanza,

este gobierno ha optado por endeudarse brutalmente, hipotecando el futuro del país”.

Además, Naveillan cuestionó que el gobierno haya mantenido en reserva un proyecto de ley que endurece las sanciones por licencias fraudulentas y que recién se publicara el sábado 24 de mayo, justo después conocerse el informe de Contraloría. “Este proyecto estaba guardado en un cajón y ahora un día después de lo revelado por Contraloría lo publican, parece una maniobra desesperada, no una decisión de fondo” acusó.

Finalmente, informó que ofició a Contraloría y a todos los servicios involucrados para saber si se han iniciado procedimientos contra los funcionarios que pudieran haber hecho uso de licencias fraudulentas. “Aquí hay que investigar a fondo. No se puede permitir este abuso de los recursos de todos los chilenos”, finalizó.